

Reversa

En lo que fue engaño a la oposición, en que participaron el Presidente y los diputados priístas, o en una rebelión legislativa frente al Ejecutivo, nada de lo cual estimulará la democracia, se han establecido condiciones inequitativas e impropias para el próximo proceso electoral.

COMO OCURRE YA CON LAS AGLOMERACIONES URBANAS en torno de Guadalajara y Monterrey (y con esas ciudades mismas), dentro de un año la gran zona metropolitana será regida por gobiernos surgidos de la oposición, si se concreta en el Distrito Federal el anuncio emitido por la jornada electoral en el Estado de México. La capital de la República será al comienzo del año próximo, una isla gobernada por el PRI en un mar dominado por Acción Nacional y el PRD, cuyos candidatos ganaron hace una semana prácticamente todos los municipios conurbados.

Ante la visión apocalíptica, sustentada en hechos, de ir perdiendo gradualmente el gobierno de las capitales y las grandes ciudades, o aproximarse a hacerlo, el PRI reculó en las reformas electorales. Comenzó a andar en reversa, en un retroceso peligroso porque al caminar hacia atrás las posibilidades de tropiezo son aún mayores que si se lanzara hacia adelante.

La jornada electoral de hace una semana produjo resultados muy complejos que, por lo demás, aún no acaban de conocerse, y no podemos por consecuencia medir enteramente sus alcances. Pero sus trazos más evidentes y generales indican, por un lado, un alto nivel de abstención, un avance sostenido de los partidos opositores, tanto en número de votos como en espacios de gobierno y territorios y ciudadanos gobernados, y un franco declive del partido gubernamental, en unos y en otros terrenos.

Es difícil establecer las causas del abstencionismo. Ni siquiera, en rigor estricto, es posible saber si crece, disminuye o permanece estable. Antaño parecía haber una mayor participación, pero cada día nos va quedando más claro que las cifras que arrojan los procesos electorales tenían mucho de artificiales; se consignaban en las actas pero no necesariamente resultaban de hechos reales, de presencia de ciudadanos en las urnas. Hoy, como es ya prácticamente imposible ese fingimiento, o ha tenido que disminuir en grado considerable, los números resultan más apegados a la realidad, que es por eso preocupante. En Naucalpan, por ejemplo, el nivel de ausencia ciudadana en las urnas fue muy alto. En la lista nominal había medio millón de personas y votaron apenas poco más de doscientos mil. Si bien en todo el estado el PAN incrementó su presencia en 13.3 por ciento, en el antiguo San Bartolo ese partido, ganando ahora, obtuvo menos votos que hace tres años, perdiendo.

La ausencia de los ciudadanos es motivo de preocupación para los demócratas, pero para los mandos del PRI indica quizá algo más grave. Se trata de la pérdida del voto duro, como se llama al que expresa en el sufragio su fidelidad al sistema. Obtenido por métodos clientelares, ese sufragio seguro decreció notoriamente. Barrios como El Molino, donde hubo siempre una reserva priísta que en épocas contribuyó poderosamente a equilibrar el crecimiento panista en las colonias residenciales de aquel municipio (señaladamente Satélite) se mostraron renuentes hace una semana a expresarse en favor del partido que controla buena parte de los mecanismos de la vida pública cotidiana. Allí, como en el resto de la entidad, el PRI diligió recursos financieros, que permiten pagar campañas de movilización del voto. Y ni así consiguió remontar el oleaje contrario a su interés.

Con votación abundante o escasa, sin embargo, el PAN consolida su capacidad de gobierno. Los ayuntamientos de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza (la zona NZT, como se la llamó al perfilarse la conurbación), Huixquilucan, Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tepotzotlán, son, entre otros, hasta sumar 22, el cinturón panista que encorsetará al priismo capitalino, sobre todo en el norponiente de la capital.

Y en el extremo oriente, el ceñimiento provendrá del PRD, que ganó la ancha franja formada por Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Texcoco, Acolman, Teotihuacán y, más allá, Hueyoxtlá y Zumpango, que con Tula, Tlaxcoapan, Tetepango, Francisco I. Madero y eventualmente Mixquihuala, en Hidalgo, forman una poderosa zona de influencia que ocupa una amplia porción de la meseta central.

No sólo obtuvieron el gobierno de ciudades importantes los candidatos opositores. Es probable que al menos neutralicen el tradicional predominio del PRI en la legislatura del estado. Por primera vez en la historia, ese partido no ganó abrumadoramente todas o casi todas las curules. Y como se combinó la suma de sus derrotas con el descenso de su votación, quizá no pueda beneficiarse de la sobrerrepresentación que permite la gobernabilidad legislativa, y ésta dependerá de los acuerdos entre los grupos parlamentarios opositores. Aun visto desde la perspectiva de la mecánica camarál local, el acontecimiento es interesante e importante. Pero adquiere potencialmente mayor relieve porque el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, es todavía el gobernador de esa entidad, y deberá acudir a la legislatura para el refrendo de su licencia, que puede serle negada. Al menos no le será extendida automáticamente.

Los dos principales partidos opositores ga-

naron en el centro de México (y Acción Nacional también en Coahuila, donde gobernará las dos principales ciudades, Saltillo de nuevo y por primera vez Torreón) merced a una mezcla de factores, entre los que descuellan su propio esfuerzo, la cosecha de años de tesonera paciencia (en el caso panista), pero también el desgaste del PRI, que poco o nada tiene ya que ofrecer a los electores. Por esos motivos, y ante la amenaza de perder sin remedio el control de la capital, el PRI lanzó a sus diputados federales a dar marcha atrás en los acuerdos que se había convenido fueran la plataforma de la reforma electoral, llamada "definitiva" por el presidente Zedillo en su remoto discurso de toma de posesión.



Cuando el todavía gobernador del Estado de México, Emilio Chuayffet, acuda a la legislatura de esa entidad para renovar la licencia que le permita seguir siendo secretario de Gobernación, quizá se encuentre con una mayoría que rechace su solicitud.

Sin que lo hubiera anunciado así desde el principio, el partido gubernamental resolvió que todo lo acordado a lo largo de más de veinte meses de erráticas negociaciones, tuviera un precio: el apoyo opositor a una fórmula de financiamiento cuya aplicación es necesarísima para el gobierno y su partido. Los tres partidos minoritarios en el Congreso rehusaron su asentimiento a la presión priísta, la reforma se congeló y fue precisa una operación tradicional, el envío de las iniciativas legales desde Los Pinos, para romper el *impasse* que se prolongaba mucho más allá de lo admisible.

El miércoles 13, por la cifra día de mal faro, reventó el consenso tan trabajosamente forjado a lo largo de casi dos años. En la comisión dictaminadora, la mayoría priísta enmendó la iniciativa presidencial, muy importante porque en ella se había acatado el acuerdo conseguido bajo la coordinación del secretario de Gobernación, y recogido todo aquello en lo que se logró explícito consenso. Todo eso fue arrojado por la borda en el dictamen del miércoles y en la discusión del jueves.



A su regreso de Chile y Argentina, y antes de partir a Asia, el presidente Zedillo hizo suyo el retroceso impuesto por los diputados del PRI a las negociaciones sobre reforma electoral, con lo que ha dejado imposible todo nuevo intento de pacto político.

Antes de examinar los temas en que se produjo el timorato e iracundo retroceso priísta, conviene determinar el alcance de esa rebelión. Es preciso caracterizar adecuadamente la disensión, saber de qué se trata, precisar si es un valor tendiente entre el presidente y sus diputados, o si éstos resolvieron emanciparse y actuar con la voluntad propia de los mayores de edad. A pesar de que apenas volvió de Chile y Argentina (y antes de volver a salir, como hará el miércoles próximo, durante diez

días más) el presidente Zedillo hizo suya la posición de los diputados, es pertinente el planteamiento, pues falta saber si prohió de antemano la reversa priísta, lo que entraña una estafa a la oposición, o no tuvo más remedio que asimilarse y soslayar que padeció él mismo una derrota.

Cualquiera de los dos extremos significa peligro para la estabilidad nacional. Si el Presidente, aprovechando además la circunstancia de un viaje diplomático a América del Sur, aceptó formar parte de un doble juego, cuyo resultado es la fractura de la capacidad de negociar, de la posibilidad de que se respete la palabra empeñada, estaríamos frente a la negación de la negociación, pues ya nadie creerá en nada de lo que en adelante, en ese y otros terrenos intentará pactarse. Sí, en cambio, en efecto las infanterías priístas se hartaron de llevar sobre sus hombros a la tecnocracia que no mide el alcance de sus decisiones, y desacataron sin aviso la instrucción presidencial contenida en el proyecto de reformas, precisamente aprovechando el tenue vacío que dejó la ausencia presidencial, estaríamos ante la ruptura de la unidad gobernante, cuyas consecuencias son incalculables.

Naturalmente que la separación entre el gobierno y su partido, especialmente la abstención presidencial en las decisiones partidarias, es un factor esencial de la verdadera transición democrática. Pero cuando se produce por accidente, no como resultado de una estrategia trazada en un proyecto, y cuando deriva de la voluntad de mantener por vía sesgada el poder que cada vez más le regatea al PRI la decisión ciudadana, esa disensión puede generar estereotipos riesgosos.

Las modificaciones introducidas al proyecto presidencial, contra la que votaron sin fisuras los grupos legislativos de los tres partidos minoritarios son de distinto rango, pero todas conspiran contra el adecuado clima político que requieren las elecciones. Será lesiva de la libertad de los partidos, aún del propio PRI, la que impide las candidaturas simultáneas. En un cierto número de casos era posible ser al mismo tiempo aspirante a una diputación de mayoría y figurar en la lista que compite por la representación proporcional. Esa simultaneidad permitía a los partidos estimular sus campañas con candidatos atractivos e importantes, a la vez que asegurar el ingreso a la Cámara de esas figuras eminentes, puestas de ese modo a cubierto de un eventual fracaso en los comicios.

Aparte las que conciernen a la equidad, la principal innovación retardataria, porque es la más claramente vinculada con la decisión priísta de prolongar por medios artificiales una vida en el poder que el electorado está negándole, es la prohibición de las coaliciones. Es verdad que se las admite y se legisla sobre ellas, pero se las complica tanto, tal cual ocurre en la ley todavía vigente, que de hecho se las vuelve imposibles.

La obvia intención de impedir un acuerdo entre partidos sobre todo en lo que concierne al Distrito Federal fue tan clara que se expresó en un artículo transitorio específico. La clausura de esa vía de acción política fue una desesperada respuesta del gobierno a las varias iniciativas, surgidas desde orígenes muy diversos, por propiciar la creación de un frente amplio opositor que sin resquicio para la duda triunfe en la pionera elección de gobernador de la ciudad de México. El aislamiento de los partidos, su combate entre sí, que erróneamente adquiere a veces mayor virulencia que el que libran contra su adversario común, es una de las pocas armas que en favor de su propia preservación puede hoy esgrimir el PRI.

También blandirá, al menos en el proceso electoral del año próximo, las armas de la inequidad. En torno de ese tema giraba principalmente el debate político que termina de tan mal modo ahora. Se habían conseguido acuerdos, insuficientes e insatisfactorios relacionados con la presencia de los partidos en los medios de información. Aún en ese punto se manifestó la irritación priísta o su capacidad de engañar al interlocutor haciéndole creer que acepta lo que en el fondo no quiere admitir. En vez de que se reparta igualmente el 40 por ciento del tiempo disponible para el efecto (y 60 por ciento proporcionalmente a su implantación electoral), el principio de igualdad se redujo al 30 por ciento. Pero eso es casi intrascendente comparado con el asunto del dinero, el que hizo detonar la negociación, u ofreció al gobierno y al PRI el espléndido pretexto para cancelar los resultados de meses de interlocución.

Los partidos dispondrán, todos, de enormes sumas procedentes del financiamiento público. Se parte para justificar esa medida (aún el Presidente lo hizo, al asociarse con los diputados que presuntamente lo desacatan) de una falacia: si los partidos no reciben abiertamente cuantiosos recursos públicos, se harán de ellos por vías ilegítimas, ya del propio gobierno, como antes; ya de actividades ilícitas como el narcotráfico. Lo cierto es que, en 1997, un año que hasta en la óptica del secretario de Hacienda no se abrirán expectativas favorables para la economía, los partidos contarán entre las pocas empresas o agrupaciones prósperas.

No es mal negocio invertir en la democracia, condición de la estabilidad que a su vez genera el clima propicio para el desarrollo económico. Pero inflar las cifras a partir de la creencia de que así se evitará la caída del sistema, es un error y un abuso.

Los partidos minoritarios, opuestos al derroche, quedaron en un grave predicamento. Si aceptan los copiosos recursos de que el PRI los dotó (por supuesto para asignarse a sí mismo cantidades muchos mayores), se asociarán a un modo de ser que puede serles reprochado por el despecho ciudadano, aunque los destinen a fines nobles. Si, congruente consigo mismos, rehusan recibir la demasía que objetaron, quedarán en desventaja propagandística frente a un partido derrochador. Pero quizá el electorado aprecie su austeridad y la corresponda.